

Transición energética y agrícola



JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTÍNEZ
Ex viceministro de Hacienda

A raíz de la guerra que se está viviendo en el oriente europeo con la invasión de Rusia a Ucrania y la consecuente escalada de los precios internacionales del petróleo, las materias primas y en especial los alimentos, surge una reflexión frente a la seguridad alimentaria y energética del país.

Colombia es un país que fomenta de manera decidida la transición energética y trabaja en crear un ambiente favorable para la gestión del cambio climático. De igual forma, aprovecha los recursos naturales para financiar los programas e inversión que el país necesita.

Es una realidad que los hidrocarburos y los minerales son fuente de desarrollo para la comunidad y son indispensables para implementar la transición, sobre todo en momentos como estos, en los que, si bien los altos precios internacionales del petróleo nos proporcionan unas rentas adicionales, lo cierto es que, la seguridad y la autosuficiencia energética, no se encuentran garantizadas.

En efecto, si Colombia deja de explorar y producir hidrocarburos e implementa una política que frene el desarrollo de esta

industria, se verá obligado a importar combustibles con fuertes consecuencias económicas no solo para las finanzas públicas, sino para todos los colombianos, pues implica, un alza importante en los precios de la gasolina y en el servicio público de gas.

En materia de seguridad alimentaria, surgen dudas frente a la capacidad del país para reaccionar ante un riesgo en los mercados internacionales. Los precios de los alimentos están disparados, descontando los efectos del paro, entre otras cosas, por la necesidad de importar cereales, pero especialmente por nuestra dependencia frente a los insumos agrícolas, fertilizantes y agroquímicos que importamos y son la base de nuestra producción.

Es el momento de promover una transición agrícola, que en la que el Estado participe activamente de este cambio, garantizando que los recursos que destina a investigación y transferencia tecnológica en el campo, se dirijan a esta transformación productiva, estudiando, fomentando y aplicando una agricultura realmente regenerativa y orgánica que nos abra una nueva fuente de recursos en los mercados que cada día demandan más alimentos producidos de manera amigable con el ambiente y sin la presencia de químicos.

Para solucionar nuestros problemas agrícolas, no es suficiente con subsidiar el precio de los insumos, que termina en los bolsillos de las multinacionales de la industria química y no se refleja en beneficios de nuestros agricultores. Los altos precios no se quedan en los productores pues se van en mayores costos de los insumos. La solución tampoco es garantizar un precio de compra a los productores, que no pretenda eficiencias, y si fomenta que los grandes capitales se vuelquen al campo a recoger subsidios dirigidos a ayudar a los pequeños agricultores. Los recursos de investigación se deben dirigir únicamente a promover la agricultura orgánica, la convencional tiene quien la defiende.

Subsidiar el campo no es la solución. La generación de créditos con tasa compensada para la reconversión productiva a largo plazo 15, 20 y 25 años es una de las medidas que se debe adoptar. Igualmente se debe impulsar la generación y divulgación del conocimiento, el fomento de bancos de semillas propios y autóctonos, así como también, se debe liberar al agricultor de la dependencia de los abonos de síntesis química, los transgénicos y los agroquímicos.

Lea completo en web



CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ
@liderazgmr

Entre más cerca estemos de tener una mente en calma, más cerca estaremos de tener una mente fuerte.

Marco Aurelio

Austeridad estatal

La austeridad estatal no solo significa que el gobierno gaste menos, sino mejor. Nunca en la historia el Estado colombiano había sido más grande (alrededor del 33% del PIB). El déficit fiscal (7% del PIB) y la deuda (57% del PIB), jamás habían sido más cuantiosas. Además, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el gasto ineficiente de recursos públicos, les cuesta a los contribuyentes colombianos alrededor de \$50 billones (4,8% del PIB).

Este problema hay que enfrentarlo en tres niveles. El primero, siguiendo al premio Nobel de economía, James Buchanan y su escuela de la elección pública, es que la mayor parte de la población perciba que derrochar recursos del Estado nunca es bueno y que a todos nos cuesta, aunque algunos se beneficien en el corto plazo. Hay que desterrar la idea de que el Estado es rico o que crea riqueza o que puede solucionar todo tipo de problemas. Debe crear las condiciones para que surjan muchas

empresas privadas exitosas, que son las que de verdad generan riqueza y sostienen al propio Estado con los impuestos que pagan. El Estado debe ser una especie de árbitro imparcial que se dedique a unas tareas importantes, aunque limitadas y concretas en materia de seguridad, justicia, defensa, ayuda temporal y subsidiaria de los más necesitados, garantizando unas infraestructuras y unos servicios públicos básicos o pactando para ello con el sector privado.

EL TERCER NIVEL DE AUSTRERIDAD DEBE SER LA LIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DEL GASTO ESTATAL

El segundo nivel de acción contra el gasto ineficiente es el de empezar, lo más pronto posible, a suprimir, fusionar o reducir el presupuesto de entidades y cargos redundantes o inoperantes, cuyas funciones podrían ser perfectamente asumidas por otros organismos existentes. Dejando de lado la necesaria discusión en los ámbitos departamental, distrital y municipal, suprimiendo entidades burocráticas de poca o nula utilidad del gobierno central, se podría llegar a un ahorro aproximado de \$1,5 billones. Con la supresión, fusión y reducción de los ministerios podrían ahorrarse alrededor de \$2 billones. Acabando con los aportes nacionales a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), nos ahorraríamos unos \$120.000 millones. Fusionando embajadas, el ahorro sería de \$200.000 millones. Además, con una mínima reducción del presupuesto de la Presidencia, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, se lograría un ahorro de \$2,2 billones. En total, estas medidas nos ahorrarían a los colombianos alrededor de \$6 billones.

Por último, el tercer nivel de austeridad debe ser la limitación constitucional del gasto estatal. Si por ejemplo se establece que el presupuesto total del conjunto de las ramas de poder público y de los demás órganos autónomos e independientes que integran el Estado colombiano no puede ser mayor a 25% o a 30% del PIB, los políticos y funcionarios estarán obligados a moderarse más que ahora. Hay que ponerle candados constitucionales y blindajes legislativos a la tentación malgastar los recursos del Estado, al tiempo que la mayoría de los colombianos debemos empezar a respaldar a los buenos políticos que proponen austeridad estatal de verdad y no a los demagogos que nos meten la mano en nuestros bolsillos y asfixian a las empresas exitosas con impuestos depredadores para seguir derrochando.



JUAN DAVID GARCÍA VIDAL
Libertank

Petro, el autócrata



LUIS GUILLERMO VÉLEZ CABRERA
Abogado
lgvelezcabrera@gmail.com

El problema de Petro no son sus ideas de izquierda. En general, las ideas de la izquierda dura, como la expansión del Estado a la esfera privada, la excesiva regulación de los mercados, las altas cargas tributarias y el abrazo de las políticas identitarias -como el extremista movimiento woke que se riega como una plaga de langostas por el mundo- son malas o, simplemente, contraproducentes.

El Estado empresario es un desastre incorregible y la regulación desbocada dificulta la innovación y el emprendimiento. Las altas cargas tributarias, sobre todo a las empresas, desincentivan la inversión y motivan la fuga de capitales. Y las políticas woke -que van desde el ultrafeminismo, hasta la indeterminación del género, pasando por una acusación ahistoriada de racismo estructural- tribalizan la sociedad.

Su resultado casi nunca es una sociedad más justa e igualitaria. Todo lo contrario. La implementación de estas políticas usualmente trae consigo de-

semplo, pobreza, inflación, fractura social, corrupción y anomia. Los políticos se hacen más poderosos -y en muchos casos más ricos-, los empresarios huyen, las clases medias se erosionan y los pobres se hacen más pobres. La desesperación crece y con ella el resentimiento, que es a la vez reprimido y desviado hacia los chivos expiatorios del momento: inmigrantes, judíos, "escuálidos", oligarcas, blancos, etc.

LA DESESPERACIÓN CRECE Y CON ELLA EL RESENTIMIENTO

Pero, digo, esto no es lo peor de Petro. Si fuera, su posible elección como presidente (considerando que por ahora encabeza algunas encuestas) no sería una hecatombe sino una simple tragedia. En cuatro años vendría otro a recoger los pedazos de la destrucción, como le tocó a Enrique Peñalosa después del tsunami que arrasó a Bogotá entre 2012 y 2015.

El problema de Petro es su carácter autocrático. Es el pequeño Fidel que lleva adentro, que admira desde sus años zipaquileños; el pequeño Che Guevara, que lo llevó a pertenecer a un grupo terrorista; el pequeño

Hugo Chávez, con quien juró en el puente de Boyacá luchar por la "segunda independencia de América" y el pequeño Putin, que lo llevaría a perseguir a sus críticos, a cerrar medios de comunicación, a expropiar a sus enemigos y a rodearse de una cuadrilla de lacayos que le va a celebrar todas las arbitrariedades que se le ocurran.

Petro no es un demócrata y nunca lo ha sido. Para él la Constitución y las instituciones de la democracia liberal son ataduras incómodas. Se equivocan quienes creen ingenuamente que el Congreso o las cortes lo van a detener. El primero lo comprará en par patadas y a las segundas las cooptará. Entre agosto de este año y 2025 se elegirán cinco magistrados de la Corte Constitucional y casi dos docenas de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado; además del contralor, el procurador, el registrador y el fiscal general. Asesorado por cubanos y venezolanos, que no saben de economía, pero sí de manipulación maquiavélica, durante su mandato procedería a una captura de poder institucional sin precedentes.

No se engañen: la eventual elección de Petro como presidente sería el comienzo de una dictadura en Colombia.